

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-5085-2020 seguidos ante el Primer Juzgado del Trabajo de esta ciudad, comparece Jenny Alejandra Walton Leiva e interpone demanda por despido improcedente y cobro de prestaciones en contra de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A, del giro de su denominación, representada legalmente por doña Laura Jara Soto, a fin de que se declare improcedente su despido y se condene a la demandada al pago de las prestaciones que señala, todo con reajustes, intereses y costas.

Por sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se acoge la demanda sólo en cuanto se declara injustificado el despido de que fue objeto la actora y se condena a la demandada a pagar el 30% por concepto de incremento legal sobre la indemnización por años de servicios, con reajustes e intereses y se la rechaza en lo demás, sin costas.

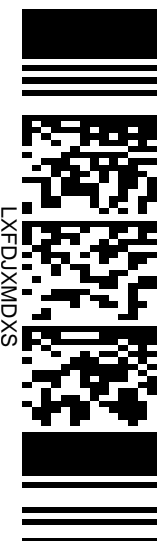
En contra de dicho fallo, la demandante deduce recurso de nulidad haciendo valer la motivación prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, se dispuso traerlo en relación y se incluyó en tabla.

**Considerando:**

**Primero:** Que se ha invocado como sustento del recurso –como se dijo– la infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, específicamente de los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728.

Argumenta la recurrente que se ha interpretado erróneamente el citado artículo 13, el que reproduce y a cuyo respecto concluye que la correcta interpretación de dicha norma, a juicio de su parte y con la finalidad de respetar la correcta coherencia interna del fallo, se basa en otorgar un beneficio al empleador consistente en imputar el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía a la indemnización por años de servicio, de la cual es beneficiario el trabajador, en el caso en que termine el contrato de trabajo respectivo en virtud de la causal señalada en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, siempre y cuando

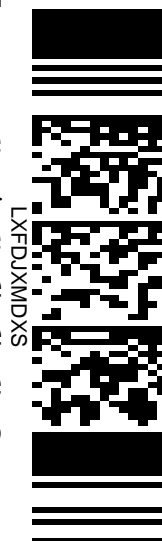


evidentemente dicha causal sea justificada, de lo contrario se entraría en la inconsistencia de considerar que el Tribunal a pesar de declarar el despido como injustificado, deba beneficiar al empleador igualmente autorizándolo a descontar el aporte que realiza al seguro de cesantía del trabajador.

Así las cosas –dice la impugnante– una interpretación armónica de esta norma sólo lleva a determinar que únicamente la aplicación justificada de la causal necesidades de la empresa, autoriza el descuento por parte del empleador, lo que en el presente caso no ha sido así, razón por la cual esta Corte de Apelaciones, conociendo del recurso de nulidad, deberá revocarlo y acoger la demanda íntegramente, ordenando el pago por concepto de recargo legal del 30% por despido injustificado que establece el artículo 168 del Código del Trabajo, y la devolución de lo descontando en razón del aporte del Seguro de Cesantía que ha realizado el empleador.

Cita jurisprudencia sobre el tema y sostiene que a lo largo del tiempo se ha conservado una postura orientada a reconocer la devolución por concepto de aporte a la Administradora de Fondos de Cesantía, negando que subsista la posibilidad de estimar válido el descuento cuando se ha acreditado que el despido que le dio origen ha sido declarado como injustificado, siendo esta la correcta interpretación del artículo 13 de la Ley N° 19.728. En tanto, interpretar dicha disposición de forma contraria podría provocar el riesgo de generar un incentivo a invocar una causal errada, validando un aprovechamiento del propio dolo, pues un despido injustificado, produciría al fin y al cabo un beneficio a quien lo practica.

Describe la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo y pide invalidar parcialmente la sentencia recurrida, sólo en tanto se ordene la devolución de lo descontado por el empleador por concepto de aporte al Seguro de Cesantía, en razón de los vicios invocados y se dicte sentencia de reemplazo con arreglo a derecho, declarando que procede la devolución del descuento del aporte del empleador al Seguro de Cesantía por aplicación de la Ley N° 19.728, por haberse estimado injustificado el despido de la trabajadora.



**Segundo:** Que, en la sentencia impugnada, se fijaron como hechos, los que siguen:

a) La demandante ingresó a prestar servicios el 1 de marzo del 2011 para la demandada, en calidad de agente de ventas y fue despedida el 30 de junio del 2020 por necesidades de la empresa.

b) El 13 de julio del año 2020 las partes celebraron un finiquito en que se le pagó a la demandante por concepto de indemnización por años de servicio la cantidad de \$15.654.060 y se descontó por aporte patronal al fondo de cesantía la cantidad de \$3.200.268.

c) Conforme la carta aviso de despido incorporada en la audiencia de juicio, la desvinculación de la actora se produjo: *“debido al obligado proceso de reorganización y reestructuración al que ha debido someterse la Compañía, consistente en la reorganización de la Sucursal a la cual usted pertenecía siendo necesario, por tanto, prescindir de sus servicios”*.

d) En la misiva de desvinculación no se señala la forma en la cual se llevará a cabo la reorganización de la sucursal en que trabajaba la actora.

e) La demandada no aportó prueba destinada a acreditar las circunstancias del despido.

**Tercero:** Que, sobre la base de los hechos narrados precedentemente, el juzgador concluyó la imposibilidad de apreciar de los antecedentes señalados en la carta, el trasfondo técnico o económico, grave, objetivo y permanente que hizo necesaria la reorganización de la empresa, razón por la cual declaró el despido improcedente y accedió a ordenar el pago del recargo legal sobre la indemnización por años de servicios.

En cuanto al descuento del seguro de cesantía, el sentenciador razonó que no resulta procedente disponer el reintegro aun cuando el despido de la demandante se haya estimado como improcedente, ya que aquella declaración no invalida el despido y, por lo tanto, tampoco deja sin efecto la causal invocada, por lo que malamente puede entenderse que el despido fue en virtud de una causal distinta, que impida la aplicación del artículo 13 de la Ley N° 19.728, a lo que une la



norma del artículo 168 del Código del Trabajo, que prevé las únicas situaciones en que el despido se entenderá realizado por las causales de necesidades de la empresa y el sentido claro de las disposiciones del referido artículo 13 y de la norma del artículo 52 de la Ley N° 19.728. Por ello, desestimó dicha petición.

**Cuarto:** Que, al respecto cabe considerar que el artículo 1° de la citada Ley N° 19.728 prescribe: *“Establécese un seguro obligatorio de cesantía, en adelante “el Seguro”, en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, en las condiciones previstas en la presente ley...”*. Por su parte el artículo 5° preceptúa: *“El seguro se financiará con las siguientes cotizaciones:*

*“a) un 0,6% de las remuneraciones imponibles, de cargo del trabajador.”*

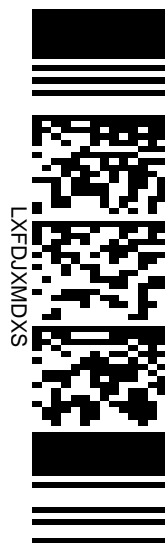
*“b) un 2,4% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador.”*

*“c) un aporte del Estado que ascenderá anualmente a un total de 225.792 unidades tributarias mensuales, las que se enterarán en 12 cuotas mensuales de 18.816 unidades tributarias mensuales.”*

*“Para todos los efectos legales, las cotizaciones referidas en las letras a) y b) precedentes tendrán el carácter de previsionales...”*.

**Quinto:** Que, como ya se ha señalado en decisiones anteriores, el objetivo del legislador al establecer el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728, ha sido favorecer al empleador en casos en que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo.

Lo anterior es excepcional y por ello evidentemente su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, así entonces sólo puede proceder cuando se configuran los presupuestos del artículo 161, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por sentencia judicial se ha



declarado que tal despido carece de causa justificada o es improcedente, no es posible que el empleador se vea beneficiado, siendo autorizado para imputar a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía.

**Sexto:** Que, en consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, no se satisface la condición para la imputación en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Así, entonces, se evidencia infracción de la citada norma como lo alega la recurrente.

**Séptimo:** Que, por consiguiente, el presente recurso de nulidad debe ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en estos antecedentes RIT O-5085-2020, caratulados “Walton/Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A”, en consecuencia, se la invalida **sólo en cuanto** rechaza la demanda en todo lo demás y se la sustituye por la que se dicta a continuación, sin nueva vista y separadamente.

Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial Javiera González S., quien estuvo por rechazar el presente recurso, por las siguientes consideraciones:

1) Que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 19.728, el financiamiento del seguro es tripartito y lo cotizado por los trabajadores con contrato indefinido se abona a la cuenta individual por cesantía conjuntamente con el aporte del empleador ascendente a un 1.6%. El fondo de cesantía solidario se financia también con aportes del empleador por un monto de 0.8%, más la contribución del Estado y su finalidad es solventar prestaciones básicas cuando los recursos de la cuenta individual no son suficientes.

2) Que, por otra parte, el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728 dispone que si el contrato terminare por alguna de las causales



previstas en el artículo 161 del Estatuto Laboral, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicio regulada en el derecho del trabajo común, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior. En su inciso segundo prevé: *“se imputará a esta prestación la parte del Saldo de la Cuanta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15”*.

3) Que en el Mensaje con que S.E., el Presidente de la República, envió el Proyecto de Ley N° 19.728 al Congreso Nacional, se señala que la iniciativa se enmarca en el profundo proceso de cambios que experimenta el trabajo en el mundo, una nueva realidad que lleva a una creciente competencia y que *“genera una mayor movilidad relativa en el empleo”*, buscando *“facilitar que trabajadores y empleadores puedan enfrentar estas nuevas condiciones entregándoles mayor protección, particularmente a aquellos sectores más vulnerables de la fuerza de trabajo”*. Así también se establecen como criterios básicos orientadores del proyecto de ley, los relativos a una mayor protección social, a la mantención de niveles de ingresos durante el período de cesantía, la experiencia comparada para evitar las distorsiones que suelen ocurrir con motivo de los seguros tradicionales, combinación de un ahorro individual obligatorio con un Fondo Solidario, este último financiado con una parte de la cotización del empleador y con aporte estatal y la posibilidad de imputar los fondos de la cuenta individual que sean de cargo del empleador a la indemnización por años de servicios que éste puede verse obligado a pagar, facilitándole así tal obligación.

En fin, conforme a la historia fidedigna del establecimiento de la ley la finalidad del denominado seguro de desempleo ha sido alcanzar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de un trabajador cesante en el evento que el motivo del término de la relación laboral no otorgue derecho a indemnización y la carga económica que puede



eventualmente representar para un empleador el hecho del despido, cuando la razón del cese de los servicios lleva aparejada necesariamente indemnización, cuyo es el caso de la desvinculación por necesidades de la empresa en que lo único que pudiera discutirse sería la procedencia o no del recargo legal. Así, tratándose de causales de despido que en conformidad a la ley no dan derecho a indemnización por años de servicio, el seguro de cesantía actúa como una suerte de resarcimiento a todo evento, cuestión que no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico laboral, ya que, tratándose de ciertos trabajadores esa indemnización procede siempre, independiente del motivo del término de la relación laboral –renuncia o despido–. Pero en los otros casos, esto es, cuando el término de la relación laboral da derecho a esa indemnización, el régimen contemplado en la Ley N° 19.728 mantiene subsistente esa responsabilidad directa del empleador, en el sentido que debe pagar la indemnización legal que corresponde.

4) Que, por consiguiente, es el legislador –sin hacer diferencia alguna– quien autoriza expresamente al empleador a imputar al pago de la indemnización por años de servicio el 1,6% pagado durante el período en que estuvo vigente el contrato de trabajo indefinido. Se busca asegurar la solución efectiva de ese beneficio, mediante una parte de la cuenta individual de cesantía que se complementa con el total del resarcimiento por antigüedad.

5) Que la disposición referida no establece más limitaciones que aquellas que hacen procedente el beneficio, de manera que no es condición para que el empleador pague la indemnización por antigüedad en la forma dispuesta por el artículo 13 de la Ley N° 19.728, que la decisión de finiquitar el trabajador, por la causal de necesidades de la empresa, sea aceptada por el dependiente o sea declarada como efectiva posteriormente por un tribunal.

6) Que, la idea anterior se corrobora con la norma del artículo 52 del mismo texto legal, en que luego de reconocer el derecho del trabajador a disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, si éste ha accionado por despido injustificado, indebido o improcedente, o por despido indirecto conforme al artículo 171 del



Código del Trabajo, agrega que *“Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”*.

Regístrese.

Redactó la Fiscal Judicial, Javiera González S.

Nº Laboral – Cobranza-2599-2020.

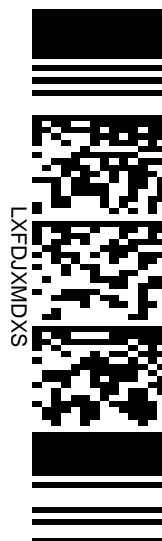
Pronunciada por la Duodécima Sala, Presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, la Ministra (l) señora Pamela Quiroga Lorca y la Fiscal Judicial señora Javiera González Sepúlveda.

En Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

TOMAS GUILLERMO GRAY  
GARIAZZO  
MINISTRO  
Fecha: 31/05/2021 12:56:55

PAMELA DEL CARMEN QUIROGA  
LORCA  
MINISTRO(S)  
Fecha: 31/05/2021 16:07:50

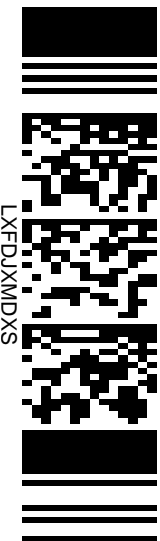
JAVIERA VERONICA GONZALEZ  
SEPULVEDA  
FISCAL  
Fecha: 31/05/2021 13:42:59





Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Ministra Suplente Pamela Del Carmen Quiroga L. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue.

**Vistos:**

Se mantienen los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del fallo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, no afectados por la declaración de nulidad precedente.

**Y se tiene, además, presente:**

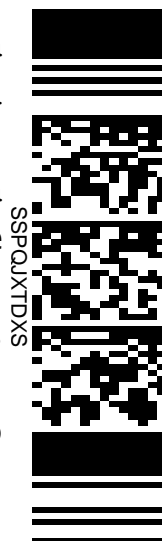
Los basamentos cuarto, quinto y sexto, primer párrafo, de la sentencia de invalidación que antecede y, con su mérito, se concluye la procedencia del reintegro del descuento del seguro de cesantía realizado por el empleador de las indemnización por años de servicios que correspondió a la trabajadora, por lo que el libelo debe ser acogido también en ese aspecto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 161, 168 y 446 a 462 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se acoge la demanda de autos interpuesta por Jenny Alejandra Walton Leiva en contra de Chilena Consolidada Seguros de Vida S. A., en consecuencia:

- a) se declara injustificado el despido de que fue objeto la actora.
- b) la demandada deberá pagar a la demandante el recargo del 30% a que se refiere el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, por la suma de \$4.696.218.-
- c) la demandada deberá restituir a la actora la suma ascendente a \$3.200.268 descontado por concepto de aporte patronal al seguro de cesantía.
- d) las sumas señaladas deberán pagarse con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

II.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido completamente vencida.



Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial, Javiera González S., sólo en lo que se refiere a la petición de reintegro del aporte patronal al seguro de cesantía, petición que la disidente estuvo por rechazar por las argumentaciones vertidas en la disidencia al fallo de nulidad que antecede, las que tiene por reproducidas en esta decisión.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Fiscal Judicial, Javiera González S.

N° Laboral Cobranza 2.599-2020.

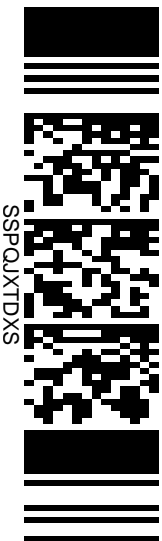
Pronunciada por la Duodécima Sala, Presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, la Ministra (l) señora Pamela Quiroga Lorca y la Fiscal Judicial señora Javiera González Sepúlveda.

En Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

TOMAS GUILLERMO GRAY  
GARIAZZO  
MINISTRO  
Fecha: 31/05/2021 12:56:58

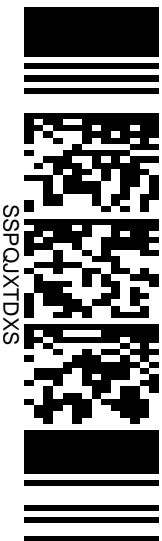
PAMELA DEL CARMEN QUIROGA  
LORCA  
MINISTRO(S)  
Fecha: 31/05/2021 16:07:58

JAVIERA VERONICA GONZALEZ  
SEPULVEDA  
FISCAL  
Fecha: 31/05/2021 13:43:02



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Ministra Suplente Pamela Del Carmen Quiroga L. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>